

EN ESTA EDICIÓN:

NOTICIAS:

- ❖ [Ejecutivo y Congreso dividido por uso de recursos de Las Bambas en Fondo de Defensa](#)
- ❖ [El país requiere consenso y continuidad en políticas para resolver sus problemas – Ministro Jaime Quijandria al despedirse de su sector](#)
- ❖ [Gobierno busca adelantar mesa de dialogo para impulsar proyecto de Cerro Quilish](#)
- ❖ [Demandan declarar en emergencia salud de poblaciones por grave contaminación ambiental](#)

INFORME:

- ❖ [Planeta Vivo 2004](#)

ARTÍCULOS:

- ❖ ["Es obligación de todo niño ser ecologista" - Eva Boyle Bianchi - Piura](#)
- ❖ [¿Quien entorpece la inversión privada? Algunas lecciones del Cerro Quilish - Michael Pollmann \(Consultor\)](#)
- ❖ [El reto del momento actual Wilfredo Ardito Vega](#)

RED MUQUI:
muqui@muqui.org



Visite nuestro portal:
www.muqui.org

Boletín N° 03
Noviembre del 2004

PRESENTACIÓN

Nuevamente ponemos a su disposición reflexiones y noticias que ayuden al debate sobre la temática minera ambiental.

Por un lado está el informe de la WWF sobre la situación ambiental en nuestro planeta con datos que alarman sobre el poco cuidado que tenemos las personas en el uso y consumo de los recursos naturales, y el poco incentivo de los gobiernos en diseñar políticas ambientales que protejan los bienes naturales y mantengan un equilibrio con el desarrollo industrial. Junto al informe hemos seleccionado un artículo de interés sobre las posibilidades que tenemos para cuidar y respetar el ambiente y nuestro planeta, ya que no tenemos otro.

Siguiendo nuestra reflexión sobre la situación minera en el país, compartimos un artículo que coloca algunos puntos que están detrás de los conflictos mineros y que merecen una atención y debate por parte de los actores sociales, políticos, económicos para alcanzar mínimos consensos que lleven al desarrollo sostenible y al bienestar de las personas.

NOTICIAS

❖ **Ejecutivo y Congreso dividido por uso de recursos de Las Bambas en Fondo de Defensa**

Un fuerte obstáculo surgió ayer entre el Ejecutivo y el Congreso en medio de las discusiones sobre la implementación del Fondo de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana.

Según el ejecutivo en voz del ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, esta reserva será financiada en el primer año- y por única vez- con 25 millones de dólares provenientes del proyecto minero de Las Bambas, en Apurímac.

Ayer PPK llegó al Congreso, flanqueado por los dos principales interesados en la

creación de este fondo: el ministro de Interior Javier Reátegui, y el ministro de Defensa Roberto Chiabra, quienes sustentaron la necesidad de su creación, ante las carencias por las cuales atraviesa a Policía y las Fuerzas Armadas.

Ante los miembros de las comisiones de Defensa y Economía, Kuczynski explicó que el aporte inicial de ese fondo que tendrá carácter intangible y se pondrá en marcha el primero de enero del 2005, será de 25 millones de dólares, provenientes de los montos que reciba el Tesoro Público por la concesión del proyecto Las Bambas.

De esta manera Kuczynski descartó que se vayan a utilizar los recursos que obtendrá la región Apurímac y los municipios de la zona por esta concesión. Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Defensa, Luis Iberico, en la creación de esta reserva no deben usarse los recursos provenientes de Las Bambas por lo que propuso que la primera inyección económica provenga directamente del Tesoro Público.

En este sentido advirtió que de utilizarse el dinero de esta concesión minera, podría generarse una situación de conflicto y convulsión social por parte de los pobladores de Apurímac.

Esta advertencia fue hecha por los parlamentarios de ésta región, entre ellos Edgar Villanueva quien calificó este hecho como una provocación del gobierno.

Por su parte el congresista aprista Luis Gonzáles Posada también se mostró a favor que los 25 millones que formaban parte de los primeros 45 millones de dólares de este fondo provengan del Tesoro Público

Fuente: 26 octubre 2004 Gestión

 [volver a contenidos](#)

∴ El país requiere consenso y continuidad en políticas para resolver sus problemas – Ministro Jaime Quijandría al despedirse de su sector

Lo que el país necesita es continuidad en sus políticas y consensos para solucionar sus problemas, que son múltiples y que, en el caso del sector Energía y Minas, se presentan todos los días y, generalmente, son de largo plazo, expresó el ministro de Energía y Minas.

Asimismo manifestó que no existe emprendimiento minero, petrolero o gasífero que pueda resolverse en el ámbito de una sola administración gubernamental ya que generalmente exceden el plazo de cinco años, algunas veces de 10 y en muchas otras no se trabaja ni siquiera para la siguiente sino para la subsiguiente administración. Así hay que mirar los problemas del sector, no dejándose envolver por las discusiones del día a día porque eso es perder la perspectiva, dijo para expresar que “si nos metemos en la coyuntura, en un país como el nuestro, con tantas necesidades insatisfechas, uno termina volviéndose pesimista”.

Pero -agregó- tampoco hay que ponerse en el otro extremo, el de ser simplemente optimista sin fundamento, porque el optimismo se basa en cosas objetivas y es, en este caso, a partir de los logros del sector Energía y Minas, conseguidos por funcionarios y trabajadores, de Lima y del interior del país.

Fuente: 22 octubre 2004

∴ Gobierno busca adelantar mesa de dialogo para impulsar proyecto de Cerro Quilish

El viceministro de Minas, César Polo Robilliard, expresó la necesidad de privilegiar el diálogo con las comunidades, haciéndolo de inmediato, a fin de sacar adelante importantes proyectos mineros, como cerro Quilish, en beneficio sobre todo de los pueblos donde se llevan a cabo, en el marco del desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente que postula el gobierno.

Reafirmó en este sentido la política de minería y desarrollo sostenible, expresada a través de un decreto supremo de diciembre del año pasado que señala una serie de compromisos que deben adquirir todos los nuevos titulares mineros, en relación con el desarrollo sostenible, los mismo que se sintetizan en: excelencia ambiental, diálogo como método, transparencia y empleo en bienes y servicios en la zonas en la cual se ejecutan los proyectos y sostener un desarrollo más allá de la vida de la misma.

Reveló, igualmente que en este propósito, las autoridades de Energía y Minas sostuvieron el último viernes una reunión con los sacerdotes Marco Arana y Gastón Garatea con el propósito de adelantar la realización de la mesa de diálogo para tratar sobre el proyecto de Quilish.

“Creemos que debe convocarse de inmediato o si se considera, convocarla la Presidencia del Consejo de Ministros u otra entidad, pero tenemos que tomar una decisión pronta para sentarnos a conversar y comenzar a manejar las diferencias y establecer puntos de acuerdo para un mejor desarrollo de Yanacocha, en Cajamarca”, manifestó.

Polo Robilliard consideró que en el caso de Quilish, en Cajamarca, hubo ciertamente algunos problemas, derivados evidentemente del hecho de que la empresa se apresuró en iniciar trabajos de exploración sin haber resuelto algunos problemas que la población considera pendientes y, de alguna forma agresiones de la minería a las comunidades, según señala una nota de prensa del MEM.

Consideró que, felizmente en el caso de Quilish se logró un mecanismo de suspensión y que, conseguido ello, lo conveniente ahora es privilegiar el diálogo y hacerlo de inmediato.

Como funcionarios públicos, dijo Polo, estamos obligados a procesar y a señalar las exigencias, que de hecho se dieron en este caso e inclusive, en la evaluación para el estudio ambiental se pusieron una serie de condiciones y compromisos que garantizaban mecanismos protectores para la comunidad, como el monitoreo participativo, la comisión de supervisión y vigilancia y estudios hidrogeológicos

Fuente: 18 de octubre 2004 Gestión

∴ Demandan declarar en emergencia salud de poblaciones por grave contaminación ambiental

Los altos niveles de contaminación ambiental causados por la explotación minera, parque automotor, industria, gramadal de humedales y otras, hacen imprescindible declarar en emergencia por un año la salud de las poblaciones ubicadas en diversas zonas del país que han sido afectadas por algún tipo de contaminación ambiental, afirmó el congresista Eduardo Carhuaricra Meza.

En ese sentido, el parlamentario pasqueño acompañado de ambientalistas y diferentes ONG, presentó el Proyecto de Ley N° 11534 que plantea la declaratoria de emergencia en las ciudades de Arequipa, Chimbote, Ilo, Iquitos, La Oroya, Lima, Callao, Pisco, San Mateo de Huanchor, Cerro de Pasco y otras declaradas o por declararse como tal mediante directiva del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM.

Carhuaricra Meza sostuvo que su proyecto plantea también conformar Comisiones Multisectoriales de Salud Ambiental - CMSA en las zonas críticas afectadas, las cuales estarán conformadas por un representante del gobierno regional, municipalidad provincial y la municipalidad distrital en cuyo ámbito se ubica la zona afectada.

Además de un representante de los ministerios de Salud, Energía y Minas y Educación; un representante del Consejo Nacional del Ambiente, un representante del gremio empresarial, un representante de las empresas cuyas operaciones y actividades que generan diversas fuentes contaminantes del aire y el medio ambiente; tres representantes de la sociedad civil de las zonas críticas afectadas por contaminación ambiental.

El legislador indicó que Cerro de Pasco es una ciudad ubicada en el entorno inmediato de las zonas del laboreo minero metalúrgico, siendo éste su principal fuente contaminante del aire, lo que generó el exceso de plomo en la sangre de las personas.

Asimismo señaló que en Chimbote la contaminación se genera por la industria siderúrgica e industrias de harina de pescado, en Arequipa la contaminación es producto del parque automotor, en San Mateo el deterioro del medio ambiente es a consecuencia de los relaves mineros activos y los abandonados como pasivos ambientales, entre otros casos.

Fuente: 17 de octubre 2004 Congreso de la República

 [volver a contenidos](#)

INFORME

Planeta Vivo 2004

El hombre está saqueando el planeta a un ritmo que supera su capacidad de regeneración, según el estudio de WWF - El Informe Planeta Vivo 2004. Según el informe los seres humanos consumen un 20% más de recursos naturales de los que la Tierra puede producir y que las poblaciones de especies vertebradas terrestres, marinas y de agua dulce han disminuido una media del 40% entre 1970 y 2000.

El Informe se basa en dos indicadores claves. El primero, el Índice Planeta Vivo (IPV) que mide las tendencias generales de la población de especies salvajes en todo el mundo. Examina la riqueza natural de especies vertebradas del planeta en el tiempo y, como tal, ofrece un indicador del estado del medioambiente natural del mundo. El segundo, la Huella Ecológica, es una medida de la sostenibilidad medioambiental y sopesa la demanda pasada y presente de la

humanidad sobre los recursos naturales renovables de la Tierra. Estos dos indicadores proporcionan información vital sobre el estado de los ecosistemas del mundo y las presiones humanas que les afectan.

En sus conclusiones se muestra que la salud del planeta empeora a gran velocidad debido a nuestro consumo creciente de recursos naturales. El Índice Planeta Vivo, determina las tendencias poblacionales de más de mil especies y revela que, desde 1970 a 2000, las poblaciones de especies terrestres y marinas han descendido un 30%, mientras que las de agua dulce han sufrido una caída espectacular del 50%. WWF/Adena cree que esto es consecuencia directa de la creciente demanda de alimentos, fibra, madera, energía y agua.

Otros datos confirman la tendencia que WWF/Adena ha señalado en anteriores informes Planeta Vivo. Nuestra "huella ecológica", es decir, el impacto de la humanidad sobre la Tierra, se ha incrementado dos veces y media desde 1961. El informe de 2004 muestra que la huella media es 2,2 hectáreas globales por persona, mientras que sólo hay 1,8 hectáreas globales de terreno disponible para proporcionar recursos naturales a cada habitante del planeta. Este dato se ha obtenido dividiendo los 11.300 millones de hectáreas de terreno productivo y espacio marino entre los 6.100 millones de personas.

Asimismo, nuestra huella energética resulta muy alarmante, debido sobre todo al uso de combustibles fósiles como el carbón, gas y petróleo. Este es el parámetro que más rápidamente ha crecido de la huella ecológica, aumentando cerca de un 700% entre 1961 y 2001. WWF/Adena destaca que la sobreexplotación de estos combustibles está poniendo a toda la humanidad bajo la amenaza del cambio climático. Además, WWF/Adena considera de vital importancia que los gobiernos, la industria y la opinión pública cambien a energías renovables y promuevan tecnologías, edificios y sistemas de transporte eficientes energéticamente.

El informe muestra también que la población de Occidente consume recursos a un nivel extremadamente insostenible. La "huella" de un norteamericano medio no solamente es el doble que la de un europeo, sino siete veces mayor que la de un asiático o africano medio. El documento advierte que la presión sobre los recursos de la Tierra seguirá creciendo conforme estas regiones vayan desarrollándose y consumiendo más.

El objetivo de Un Planeta Vivo es demostrar que es posible, asequible y atractivo lograr el reto de vivir en un solo planeta. Esto es relevante para toda actividad humana, desde la gestión de recursos naturales hasta la agricultura, silvicultura o pesca, producción industrial libre de carbón, áreas protegidas y desarrollo urbano sostenibles. Uno de los objetivos es crear comunidades de Un Planeta Vivo en cada continente para el año 2009, habiendo proyectos ya iniciados o en planificación en Portugal, el Reino Unido, África del Sur, Norteamérica y China.

Ver informe completo en: http://www.wwf.es/planeta_vivo04.php

 [volver a contenidos](#)

ARTÍCULOS

“Es obligación de todo niño ser ecologista”

Eva Boyle Bianchi - Piura

Mafalda esa pequeña niña que siempre tiene una palabra crítica sobre lo que pasa en el mundo nos dice en uno de sus diálogos: “Es obligación de todo niño

ser ecologista". En una entrevista realizada a Quino su creador le preguntan: "¿Mafalda es una niña ecologista y humanista?" Y él responde: "Es obligación de todo niño ser así. De lo contrario, habría un suicidio planetario".

Nuestro medio ambiente vive tiempos difíciles y tiene graves problemas. Ya nos lo han advertido muchos conocedores del tema. Hace más de veinte años que Naciones Unidas trabaja la idea del desarrollo sostenible y de aplicar un programa de acción ecológica llamado Agenda 21. Son cada vez más las voces que se unen para advertir el peligro y conseguir un estilo de vida más sostenible.

Las catástrofes ecológicas que han asolado y siguen destruyendo nuestro planeta deberían servir para realizar una profunda reflexión sobre quiénes son los responsables de la seguridad medio ambiental? ¿Cuál es el papel del estado en la prevención y protección del medio ambiente? y ¿Cómo se hace justicia en los casos de delitos ecológicos?. Hasta ahora el balance es negativo, se contamina el medio ambiente y nadie es responsable de nada. Es grande la deuda que los seres humanos tenemos con nuestro hábitat y mucho hay que corregir en las relaciones que hemos establecido con él.

Hay algo nuevo también que es bueno resaltar, las personas están empezando a ser cada vez más conscientes de que pueden ser protagonistas a favor de un mundo solidario, ecológico y en paz. Ellos/as parten de la base de que para serlo, sólo es preciso actuar en la vida diaria con sensatez y sentido común.

El movimiento ecologista ha alcanzado su mayoría de edad. Su caminar ha sido difícil para conseguir una mayor concientización sobre la fragilidad de la "Madre Tierra" ante los enormes atentados hacia ella en nombre de un cuestionado desarrollo.

Han surgido en las últimas décadas grupos de personas inspiradas en la idea de preservar el medio ambiente, conservar la naturaleza y permitir que la gente pueda gozar de una mejor calidad de vida. El movimiento ecológico propugna la defensa de la naturaleza y trata de ponerla a salvo de los efectos de las formas de depredación que existen. Es importante subrayar que sus objetivos defienden a las personas del egoísmo, la ambición y del desprecio que algunos tienen por la buena convivencia.

Se avanza en esta defensa del medio ambiente. Aunque el camino esté a veces lleno de obstáculos. Por eso nos alegra tanto que una mujer africana, ecologista haya recibido el premio Nóbel de la Paz. Alguien de quien el presidente de su país dijo que estaba loca, que era una amenaza para la seguridad del país y que espantaba las inversiones extranjeras. Suenan conocidos los argumentos y las palabras ofensivas. Wangari Maathai nos hace una fuerte llamada de atención: "Es tiempo de actuar, no de lamentarnos de nuestra pobreza y dejar completamente en ruinas nuestro medio ambiente".

"Ser ecologista" es una forma de ser y de vivir basada en una palabra clave: RESPETO. Invita a vivir de forma que no dañemos el entorno natural destrozando el planeta. Joaquín Araujo, español, periodista y ecologista reconocido; además de contar con el Premio Nacional de Medioambiente de España nos dice: " Un correcto humanista no puede destruir la naturaleza, un enamorado del ser humano es un enamorado de la vida y un verdadero humanista es un ecologista". Parafraseándolo podríamos afirmar con él que un correcto creyente no puede destruir la naturaleza que Dios ha creado, quien lo ama, ama también la vida y un verdadero creyente es un ecologista.

 [volver a contenidos](#)

 [¿Quien entorpece la inversión privada?](#)

Algunas lecciones del Cerro Quilish

Michael Pollmann
Consultor

Los acontecimientos de las últimas semanas en Cajamarca en torno al proyecto de exploración minera del famoso Cerro Quilish producen lecturas de marcada diferencia:

- **En Lima**, la mayoría de la clase política, pero también la elite económica, perciben la resistencia de la población de Cajamarca como una actitud irracional y mal informada, rechazando el progreso que podría beneficiar a la región y entorpeciendo la inversión privada que tanto requiere el país. Además, se escucha con frecuencia que los campesinos son manipulados y dirigidos por grupos extremistas y agitadores radicales que supuestamente tendrían otros objetivos políticos.

- **En Cajamarca**, los campesinos y los ciudadanos que se rebelan, consideran su oposición a la exploración del Cerro Quilish como la defensa legítima de sus tierras y de su ambiente contra una actividad minera que beneficiaría solamente a los elites en Lima y en el extranjero y que perjudicaría las potencialidades de la región para un desarrollo sostenible y en armonía con la naturaleza. Las intervenciones del Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, las perciben como completamente desinteresadas en el futuro de la región y su gente y exclusivamente motivadas para la defensa de los intereses de las empresas mineras.

El caso Quilish, eso es nuestro temor, debería de considerarse como emblemático para el país. En muchas otras localidades, nuevos proyectos de inversión, tanto en el sector minero como en otros sectores, despiertan el mismo tipo de resistencia. La pauta en todos estos litigios es muy parecida: La población local teme la destrucción de su medio ambiente y no aprecia la inversión como una oportunidad para salir de la pobreza. Y los representantes del gobierno temen que la expansión de tales conflictos socio-ambientales podría poner en riesgo los logros macroeconómicos de los últimos años y disuadir los inversionistas.

¿Como debería de reaccionar el estado a estos conflictos y que podría hacer para prevenir su agravación y su estallido violento? Obviamente no es suficiente afirmar que en los procesos de autorización se van a garantizar la debida protección del medio ambiente y la participación ciudadana como lo exige la normatividad vigente. Ciertamente, respecto a eso se han producido algunos avances importantes en los últimos años. Hoy en día ningún proyecto importante se realizaría sin un Estudio de Impacto Ambiental y sin una o varias audiencias públicas. Se puede también asumir que las actividades mineras de la actualidad, a pesar de que siguen impactando al medio ambiente, ya no producen tantos pasivos ambientales como lo ocurrido en los siglos pasados.

Pero estos progresos indudables no han sido suficientes para prevenir los conflictos que vemos agudizándose en la actualidad. Ni la normatividad ambiental ni los mecanismos de participación ciudadana convencen a las poblaciones afectadas. Ellos los perciben como meros requisitos burocráticos cuya función sería de viabilizar los proyectos y otorgarles más legitimidad. ¿Y a que se debe esta percepción? Es que tanto las instituciones estatales que deberían de garantizar el cumplimiento de las leyes como los mecanismos de gestión establecidos por estas instituciones carecen de manera preocupante de credibilidad. Los campesinos, pero también gran parte de la población urbana del país, no tienen ninguna confianza en la imparcialidad de las instituciones y en su vocación para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

En este sentido, los conflictos socio-ambientales que estamos viviendo en muchos sitios con proyectos mineros, son otro testigo de la grieta profunda, que existe, en términos económicos, políticos y sociales, entre la clase dirigente de

Lima y las provincias. Sin duda, esa disociación, que, en otras ocasiones, produce manifestaciones mucho más chocantes (llave), no se puede superar solamente a través de un mejoramiento de la gestión minera y ambiental.

Pero eso no quiere decir que no se puede hacer nada para prevenir los conflictos socio-ambientales relacionados a proyectos mineros. Lo que hay que reconocer es que los casos conflictivos como el Cerro Quilish requieren soluciones específicas que van mucho más allá del cortoplacismo politiquero. Si el gobierno se mostrara capaz de sacar las conclusiones adecuadas de la rebelión social que vemos en Cajamarca, eso podría contribuir de manera importante a una reconciliación entre Estado y ciudadanía.

¿Pero cuales serían las conclusiones adecuadas? En los siguientes párrafos presentamos algunas recomendaciones de cambios en la política que podrían servir para prevenir o mitigar conflictos tales como la exploración del Cerro Quilish:

1. Cambiar postura y actitud en las relaciones con la población afectada

Hoy en día muchas veces tenemos que hacer la experiencia que la relación entre los representantes del Estado y la población local sigue una relación paternalista. Eso encuentra su expresión en la forma en la cual se realizan audiencias públicas, por ejemplo. Se supone que la población local, en estas audiencias, tiene el derecho de hacer preguntas, y las autoridades estatales supuestamente dan las respuestas respectivas. Pero eso no es una verdadera participación ciudadana. Lo que hay que hacer es dialogar, intercambiar y como consecuencia rectificar en la medida de los argumentos planteados por los participantes de las audiencias.

Lo que se observa con frecuencia, y lo que también ocurrió en las semanas pasadas en Cajamarca es que representantes del Estado, en reunión con representantes de la sociedad civil, se comprometen a hacer un cierto trámite y a rendir cuentas en una próxima reunión, pero después ya no aparecen para el seguimiento acordado. En el caso del Cerro Quilish, el pretexto para no acudir en la fecha que se había acordado era que no resultó exitoso el trámite que las autoridades habían prometidos. ¿Pero que postura es esa? ¿Piensan los representantes de los ministerios que pueden dejar plantados a la gente local sin consecuencia alguna?

La normatividad define en que casos se debe organizar una audiencia pública. Pero nadie impide a los ministerios a realizar mecanismos de participación también en los casos donde la ley no lo exige. Eso es lo que necesitamos: Dirigentes que piensan no solamente como cumplir con la ley, sino que analicen donde sería necesario llevar a cabo una o varias audiencias para prevenir un conflicto. Es cierto que la ley no exige una audiencia pública antes de autorizar una exploración minera. Pero en el caso del Cerro Quilish ya era visible que se produciría un conflicto importante.

En general se puede decir que en situaciones potencialmente conflictivas mejor es informar la población e invitarla a opinar lo antes posible para ganar información sobre como se podría prevenir el estallido del conflicto. En tal sentido, como puede ser que el Instituto Nacional del Catastro Minero otorga concesiones mineras sin ninguna información o participación de la población que podría verse afectada por las actividades exploratorias y de explotación. Si la ley no considera eso, hay que modificarlo, pero nadie impide al Ministerio de Energía y Minas cambiar sus procedimientos en estos casos desde hoy mismo.

Parte de la actitud burocrática y paternalista que vemos con frecuencia, incluyendo el caso del Cerro Quilish, es que, al producirse un conflicto mas agudizado, los representantes del Estado empiezan a hablar de agitadores radicales y grupos extremistas que estarían alborotando a la población local. Ese discurso es completamente superfluo, o aún peor, bastante contra productivo.

Para que sirve plantear que los campesinos se dejen manipular por extremistas. A quien le gustará ser considerado como un mal informado que no tiene su propia opinión. Lo que producen estos estereotipos es solamente un enardecimiento adicional de la población en desacuerdo. El Estado debería, más bien, reconocer las raíces propias de los conflictos socio-ambientales y su legitimidad específica.

2. Separar la gestión ambiental de la gestión sectorial

Si uno de los problemas principales que nutren el tipo de conflictos que estamos reflejando aquí es la falta de credibilidad de las instituciones del Estado, gran parte del problema se debe a la sectorialización de la gestión ambiental que fue creado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Hoy en día la aprobación de Evaluaciones Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental tanto como la fiscalización del cumplimiento ambiental de las empresas es competencia de los ministerios sectoriales, y en nuestro caso del Ministerio de Energía y Minas.

Pero la misión principal del Ministerio es el fomento de la actividad económica del sector. Eso necesariamente produce un conflicto de intereses en la institución, y todos los observadores tienen una apreciación bien clara de cual será el interés dominante. Los campesinos y los representantes de la sociedad civil se quejan que el Ministerio actúa como juez y parte, y eso es cierto, no obstante la voluntad de los funcionarios que se dedican a la protección ambiental dentro del Ministerio.

No es la culpa de los ministerios sectoriales si carecen de credibilidad en asuntos ambientales, pero todos sabemos que el gobierno de Fujimori creó este tipo de gestión sectorializada justamente con el objetivo de garantizar la dominancia de los intereses de los inversionistas frente a posibles intervenciones ambientales. Y al mantener ese sistema el gobierno demuestra que la política ambiental no goza de ninguna importancia y se ve relegada a la última fila de las prioridades. Esa negligencia irresponsable no es de exclusividad del gobierno. Nos parece sintomático que, mientras en el país se ven conflictos muy importantes relacionados a temas del medio ambiente, como en Tambogrande, en torno al proyecto Camisea y en Cajamarca, en la batalla sobre la presidencia de las comisiones del congreso, a nadie le ha ocurrido considerar la comisión del Medio Ambiente como una prioridad estratégica.

En relación al modelo sectorializado de la política ambiental lo que debería hacerse lo más pronto posible es una separación estricta de la gestión ambiental y de la gestión económica sectorial. Las Direcciones Generales de Asuntos Ambientales, y en nuestro caso la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, deberían de salir de sus respectivos Ministerios y ser concentrados en una institución ambiental coherente. Por cierto, ese cambio no garantizaría que no haya conflictos socio-ambientales con la minería. Pero por lo menos contribuiría a la recuperación de un nivel mínimo de credibilidad de las instituciones del Estado. La creación de un Ministerio del Ambiente, por ejemplo, aseguraría que el nivel de resolución de conflictos entre intereses económicos e intereses ambientales ya no sería el Ministro de Energía y Minas, pero el Consejo de Ministros. Eso aumentaría la visibilidad política de los intereses ambientales y crearía más confianza en la autonomía de la gestión ambiental.

Al considerar esta propuesta, el Gobierno debería de analizar que el modelo sectorializado de la gestión ambiental ya no resulta favorable para la inversión privada. Si bien es cierto que en la época autoritaria de Fujimori la negligencia sistemática de consideraciones ambientales facilitaba la realización de algunas inversiones, la apertura democrática ha cambiado las cosas. Somos testigos que el Ministerio de Energía y Minas ya no logra viabilizar proyectos importantes, justamente por su falta de credibilidad. Incluso los inversionistas modernos reconocen que sin licencia social no considerarían factibles sus proyectos. Y en muchos casos, como por ejemplo en Cajamarca, el Ministerio de Energía y Minas, no obstante su voluntad de fomentar la actividad minera, ya no logra conseguir una licencia social sustentable.

3. Descentralizar las decisiones sobre los proyectos de inversión

La separación profunda entre Lima y las provincias se evidencia también en la calidad del debate político sobre temas como la minería. Mientras que en la capital la clase política habla más de los beneficios económicos que traería la inversión privada, en provincia se enfatizan los impactos dañinos de carácter socio-ambiental. Los representantes regionales de la mayoría de los partidos organizan otro discurso en la provincia que sus dirigentes al nivel central. Y es solamente en raras ocasiones que los líderes de los partidos se desplazan a los sitios donde hay conflictos para participar el debate.

Hacer una evaluación continua entre los beneficios y las desventajas de las actividades mineras es un tema eminentemente político. Y la distorsión del discurso político entre Lima y las provincias impide que se produzca un entendimiento. A los de Lima les resulta fácil ignorar las preocupaciones por el medio ambiente puesto que conocen muy poco de la realidad en las zonas afectadas. Y a los de provincia les resulta muy fácil olvidar los impactos macro-económicos que su actitud podría acarrear.

¿A que se deben estas comprensiones parcializadas? Hoy en día, a pesar del canon minero y de las regalías, en la mayoría de los casos al nivel local y regional la actividad minera no se percibe como algo que traería un beneficio económico para la región, la provincia o el distrito. Forma parte de la memoria colectiva del pueblo, que las decisiones que se toman en Lima, casi nunca han sido beneficiosas para las provincias. No importa si esa percepción es justa o no – hay que reconocerla como fruto de las experiencias que la gente ha generado durante siglos con los representantes del Estado.

¿Como podría remediarse esa situación tan desbalanceada? Bueno, por un lado debe ser una obligación primordial de los partidos descentralizar sus debates y armonizar sus políticas entre Lima y las regiones. Pero eso no sería suficiente. Lo que hace falta es expandir la descentralización a los procesos de decisión sobre las inversiones. Por lo menos a mediano plazo debería de volverse competencia de los gobiernos regionales la decisión si quieren aprobar un proyecto minero o no. Claro que eso funcionaría solamente bajo la condición que la recaudación de los beneficios económicos sea descentralizada de igual manera. Que los gobiernos regionales decidan, después de evaluar los impactos socio-ambientales por un lado y los beneficios económicos por el otro lado. Si aprueban un proyecto, que asuman la responsabilidad de velar por una minimización de los impactos ambientales. Y si se oponen a un proyecto, que tengan que asumir la responsabilidad de las pérdidas de ingresos económicos al nivel regional.

Es cierto que todo el sistema de tributación y recaudación debería de adecuarse a un tal cambio, incluso la necesidad de invertir los procesos de transferencia de recursos. Que las regiones, por lo menos al largo plazo, ya no dependan de las transferencias de la capital, pero que al contrario el Estado central sea financiado por las transferencias de las regiones. Eso significaría un cambio muy radical, que sin duda requeriría de un debate largo y profundo, evaluando ventajas y desventajas. Pero si un problema fundamental del país es la desarticulación entre la clase dirigente del Estado, representado por la Capital, y la gran mayoría de la población, que otras soluciones existen para lograr que las instituciones del Estado sean concebidos como servidor de los intereses del pueblo.

¿Y entonces, quienes son los que entorpecen la inversión privada?

Regresando a la pregunta inicial de nuestro título, resulta obvio que el reproche a los campesinos del Cerro Quilish y a sus dirigentes que con su rebelión entorpecerían la inversión privada, es una maniobra bastante miope y burda. Es la responsabilidad del Estado crear condiciones bajo las cuales se podrían lograr licencias sociales para los proyectos de inversión, que el país, sin duda ninguna, necesita tan desesperadamente. Y si en la actualidad por un lado los campesinos se oponen a una inversión, por otro lado su oposición se debe en gran parte a la

falta de credibilidad en una actuación imparcial y responsable del Estado. Si hablamos de entorpecer la actividad económica, al propio Ministerio de Energía y Minas le incumbe gran parte de la responsabilidad.

Se ve cada vez mas claro que los modelos de la toma de decisiones al nivel central y de la gestión ambiental sectorializada no logran producir los mecanismos adecuados para la prevención y el manejo de los conflictos socio-ambientales del tipo Tambogrande, Camisea o Cerro Quilish. Y esa deficiencia no se puede compensar con medidas de fuerza, chantaje político o difamación de los movimientos populares. El único camino para salir adelante y lograr un entendimiento mutuo entre la actividad minera y la población local es cuestionar ese modelo tradicional y centralista y organizar los cambios políticos necesarios. No vamos a pretender que las soluciones que recomendamos en este artículo sean las únicas salidas posibles, y tampoco que sean fáciles. Pero que la clase política por lo menos empiece un debate serio sobre las raíces de los conflictos socio-ambientales y analice estas y otras propuestas de manera exhaustiva.

▣ [volver a contenidos](#)

▣ El reto del momento actual

Wilfredo Ardito Vega

warditovega@yahoo.es

Hace algunos años, para las organizaciones de derechos humanos en el Perú era claro el reto de denunciar y enfrentar los crímenes que tanto los grupos subversivos como las Fuerzas Armadas cometían. Cuando el conflicto armado interno se redujo a su mínima expresión, la principal tarea pasó a ser ayudar a obtener la libertad de los inocentes que se encontraban en prisión. En pleno proceso de la Comisión de Indultos, surgió la lucha por el restablecimiento de la democracia. Caído el régimen autoritario, surgió el proceso de la Comisión de la Verdad, con todas sus dificultades.

Sin embargo, ya con la partida de Fujimori, se pudo advertir que las personas comprometidas con los derechos humanos en las décadas anteriores, no teníamos la misma claridad que antes respecto a los retos del presente. A veces es más sencillo tener un panorama claro cuando se trata de crímenes terribles, como los ocurridos en tiempos de Belaúnde, que ubicarse en la vida cotidiana. Sin embargo, también en la rutina de todos los días en el Perú se producen situaciones que deberían cuestionarnos.

A mi modo de ver, lo que nos toca es enfrentar las causas de todo el horror que durante esos años vivimos en el Perú. Y debemos plantearlo con la misma insistencia que antes luchamos por la paz o la democracia, por la simple razón de que a quienes están en el poder, no les interesa enfrentar dichas causas: la exclusión de millones de peruanos. Ahora bien, como sucedió en las décadas de la violencia, no sólo quienes están en el poder son indiferentes: muchas personas que se consideran a sí mismas buenas, no sienten mayor cuestionamiento viviendo en un país donde millones de sus compatriotas padecen las mayores causales de exclusión, todas juntas sobre sus hombros: aislamiento geográfico, barreras lingüísticas, racismo y pobreza.

Es curioso que la mayoría de peruanos que hablamos castellano, tuvimos acceso a educación secundaria, luchamos contra el exceso de peso, usamos pasta dental y podemos llegar en menos de diez minutos a una farmacia, no nos demos cuenta de los privilegios que poseemos en este país.

De alguna forma, hemos logrado que la desnutrición, la muerte de decenas de niños de frío (este invierno en Puno, como todos los años), la condición de indocumentado o analfabeto se conviertan en problemas lejanos o invisibles. En

todo caso, asumimos, como escuché a una señora en Huancavelica, que los excluidos “no sufren, porque están acostumbrados”.

Pero si abrimos más los ojos, podemos entender mejor el país y no quedar desconcertados cada vez que un grupo de agricultores toma una carretera o protesta contra un alcalde corrupto. La mayoría de peruanos sí sufre, se siente descontenta, explotada e infeliz. ¿Alguien puede estar contento viviendo en Huancavelica o Amazonas, donde ni siquiera la capital está unida por una vía asfaltada? ¿Puede alguien estar contento cuando una empresa minera como Yanacocha amenaza el agua del cerro Quilish? ¿Es que algún trabajador del Poder Judicial, policía o maestro puede estar contento con su sueldo miserable, mientras ministros y magistrados ganan hasta cincuenta veces ese salario?

En el Perú no debería sorprendernos las eventuales protestas que ocurren, sino la pasividad o resignación de la mayor parte de la población. Desde Carabaya hasta San Clemente y desde Ayabaca hasta Apurímac, el principal temor de los peruanos más pobres es perder lo poco que tienen con el respaldo del Estado y de algunos medios de comunicación que satanizan toda movilización social.

Los recursos estatales son asignados por el régimen democrático de manera totalmente excluyente. No sólo se anuncia la adquisición de nuevas fragatas, sino que, después de asumir que el proyecto Las Bambas permitiría invertir en los campesinos pobres de Apurímac, se sabe que se pretende destinar buena parte del dinero a fondos para equipamiento militar. A muchos excluidos, la sensación que les queda es de una gran frustración.

Es en ese contexto, que debemos preguntarnos:

¿sirven los esfuerzos de nuestras instituciones y organizaciones para luchar contra la exclusión?

¿Los foros, seminarios, presentaciones de libros, desayunos de trabajo o conferencias tienen siempre como mira generar que los más pobres y excluidos puedan vivir mejor? ¿O a veces los proyectos se convierten en un fin en sí mismo? Si la democracia no parece hacer nada por enfrentar la exclusión ¿es acaso sorprendente que cause tan poco entusiasmo?

Por poner un ejemplo, ¿se hace algo por enfrentar la exclusión lingüística, traduciendo siquiera las leyes contra la violencia familiar?

¿Hemos vencido los limeños nuestro centralismo mental y podemos pensar en las prioridades nacionales o creemos todavía, que hablar de política es comentar las últimas frases y gestos de los congresistas y líderes partidarios?

Si nos ponemos a pensar un poco más, veremos que, para quien cree en una sociedad más justa y humana, los retos siguen siendo tan profundos como hace diez o quince años. Es claro que no muere tanta gente, pero es verdad que siguen muriendo. La semana pasada fallecieron tres campesinos en Puno, con lo cual suman ya once las personas que han muerto en el gobierno de Toledo mientras manifestaban contra transnacionales abusivas o políticas no los tomaban en cuenta. ¿Cuántos excluidos más deberán morir para que decidamos asumir el reto de luchar contra la exclusión?

 [volver a contenidos](#)

(FIN)

Enlaces de interés

- Boletín minero CooperAcción:
www.cooperaccion.org.pe
- Portal del agua Perú:
www.portaldelaguapwp.com.pe
- Portal ecológico Perú:
www.peruecologico.com.pe/opciones.html
- Portal ambiental Perú:
www.portalambiental.org.pe
- Boletín ambiental Alihuen:
www.alihuen.org.ar
- PNUMA: www.rolac.unep.mx
- Ministerio Energía y Minas:
www.minem.gob.pe

ATENCIÓN:

Las opiniones expresadas en los artículos son de responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las instituciones que integran la Red.

BOLETÍN DE LA RED MUQUI:

Escribanos sus comentarios y sugerencias a:
muqui@muqui.org